

Comunidad
de MadridCONSEJERÍA DE FAMILIA,
JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitirían acceder al original

ORDEN

NÚMERO 740/2026

CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS
SOCIALESUNIDAD ADMINISTRATIVA
DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN

Exp: CDAM-006-2019-02-C8826-04-24-00

Examinadas las actuaciones practicadas y documentos obrantes en el expediente de determinación de responsabilidades por incumplimiento de la obligación contractual establecida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, referente a lo establecido en el artículo 42 del Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y su Inclusión Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de adoptar las medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente por el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de reserva a favor de los trabajadores con discapacidad, procede resolver teniendo en cuenta los siguientes

PRIMERO.- Por Orden 2171/2019, de 30 de diciembre, se adjudicaron los contratos del ACUERDO MARCO de servicios de “ACOGIMIENTO RESIDENCIAL DE MENORES EXTRANJEROS NO ACOMPAÑADOS ATENDIDOS CON CARGO A LA DIRECCION GENERAL DE LA FAMILIA Y EL MENOR”, prorrogado hasta el 31 de enero de 2024.

La entidad Fundación Samu (NIF: G41914243) fue adjudicataria de 12 plazas en el Centro C7023 – [REDACTED], firmándose el contrato de Acuerdo Marco el día 31 de enero de 2020.

Mediante la Orden 1887/2020, de 28 de diciembre, de la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, se autorizó la reubicación de las 12 plazas adjudicadas de [REDACTED] número de registro de centros C7023, situado en [REDACTED] al [REDACTED], [REDACTED], código de centro C7794.

Mediante la Orden 3135/2023, de 25 de octubre, de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales se autorizó la reubicación de las 12 plazas adjudicadas al [REDACTED] Menas, [REDACTED] código de centro C7794, al [REDACTED], código de centro C8826.

Mediante Orden 3964/2023 de 19 de diciembre, se adjudicó a la entidad Fundación Samu, en el Centro C8826– [REDACTED], el número de plazas y por los importes que se indican a continuación:

Nº de plazas	Precio unitario	Días de ejecución	Base imponible	10 % de IVA	Total
12	127,49 €	91	139.219,08 €	Exento €	139.219,08 €

El plazo de ejecución del contrato basado en el Acuerdo Marco fue desde el día 1 de abril de 2024 hasta el 30 de junio de 2024.

Para responder de las obligaciones derivadas del contrato, el contratista constituyó Garantía Definitiva por importe total de 6.960,95 € (Resguardo: 202355009145C) en su modalidad de seguro de caución.

Vencido el contrato por el transcurso de su periodo de ejecución, y tras la tramitación del oportuno expediente administrativo, mediante la Orden 2650/2024, de 17 de septiembre, de la Consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales se aprueba su liquidación total por un importe de 138.772,90 euros.

SEGUNDO.- Liquidado el contrato, se inicia el procedimiento para tramitar la devolución de la garantía definitiva constituida acudiendo a comprobar el cumplimiento de la obligación establecida en el Artículo 4 del Decreto 213/1998, de 17 de diciembre, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen medidas en la contratación administrativa de la Comunidad de Madrid para apoyar la estabilidad y calidad del empleo, de tener contratado al menos un 2 por 100 de trabajadores con discapacidad en caso de que la plantilla total de la entidad, durante el periodo de ejecución del contrato, supere los 50 trabajadores, de acuerdo con el artículo 42 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de adoptar las medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente por el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril.

Para ello, con fecha de 16 de julio de 2024 se emite requerimiento al contratista para el aporte de la siguiente documentación:

- Certificado de la Tesorería General de la Seguridad Social en la que conste el número de trabajadores de plantilla durante el periodo de vigencia del contrato.
- En caso de superar los 50 trabajadores, certificado de la Tesorería General de la Seguridad Social acreditativo del porcentaje de personal discapacitado contratado en la empresa durante el periodo de vigencia del contrato incluidas sus prórrogas o, en su defecto, copia de los contratos celebrados con trabajadores con discapacidad o documentación acreditativa de la realización de medidas alternativas, hasta acreditar el cumplimiento de la obligación de reserva del 2 por 100 en favor de trabajadores con discapacidad.

Con fecha de 6 de septiembre de 2024 y en respuesta al citado requerimiento, el contratista aporta resolución favorable del INSS, de fecha 24/05/2024, de declaración de excepcionalidad y de adopción de medidas alternativas para el cumplimiento alternativo de la cuota de reserva en favor de los trabajadores con discapacidad de su empresa, en la citada resolución se indica:

1. "La declaración de excepcionalidad tiene una vigencia de tres años desde la fecha de la presente resolución (24/05/2024), conforme a lo establecido en el artículo 1.4 del Real Decreto 364/2005, de 8 de abril.
2. Autoriza la adopción de las medidas alternativas siguientes:
La celebración de un contrato de prestación de servicios con los siguientes centros especiales de empleo:
 - CONTRACION E INTERMEDIACION LABORAL por un importe anual de 98.000,00 euros.
 - APFEM AKTUA por un importe anual de 525.000,00 euros.
 - NOVAVIDA CEE por un importe anual de 111.700,00 euros.
3. "La plantilla media de la empresa declarada en la fecha de la solicitud (30/04/2024) es de 2667 personas (calculada conforme a lo establecido en la disposición adicional primera del Real Decreto 364/2005, de 8 de abril: el período de referencia para dicho cálculo serán los 12 meses inmediatamente anteriores, durante los cuales se obtendrá el promedio de trabajadores empleados, incluidos los contratados a tiempo parcial, en la totalidad de centros de trabajo de la empresa), por lo que la obligación de contratación de personal con discapacidad asciende a 53,34 personas. Dado que la empresa (según comprobación del SEPE en aplicación del Criterio Técnico 98/2016, sobre actuaciones de la Inspección de Trabajo y SS en materia de cuota de reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad) tiene una plantilla media de 19 personas con discapacidad en los 12 meses anteriores, solicita la declaración de excepcionalidad y la aplicación de medidas alternativas por las 34 personas con discapacidad dejadas de contratar"

Atendiendo a lo anterior, la citada resolución:

1. Solo es válida para acreditar el cumplimiento de la obligación de reserva del 2% en favor de trabajadores con discapacidad, desde el 24/05/2024 al 30/06/2024, siempre que se hayan realizado las medidas alternativas que se indican en el anterior apartado 2.
2. No acredita la citada obligación de reserva del 2%, durante el periodo comprendido entre el 01/04/2024 al 23/05/2024, aunque la misma si indica que la empresa ha tenido contratadas a 19 personas con discapacidad en los 12 meses anteriores a la resolución del contrato, por lo que,

quedaría acreditada la contratación de 19 trabajadores con discapacidad durante el citado período.

TERCERO.- Con fecha 6 de septiembre de 2024, se requiere nuevamente al contratista por mail para que acredite el cumplimiento de la obligación de reserva del 2% en favor de trabajadores con discapacidad durante el periodo de ejecución del contrato.

Con fecha 10 de septiembre de 2024, el contratista aporta declaración anual de discapacidad de la Junta de Andalucía de fecha 17 de mayo 2023, en la que se declara la contratación de 45 trabajadores con discapacidad, no obstante, dada la fecha de la misma y comprobado que contradice lo resuelto por el INSS en fecha 24/05/2024, a los efectos del cálculo de la presente penalidad, se atiende a lo establecido en la citada resolución de INSS:

“La plantilla media de la empresa declarada en la fecha de la solicitud (30/04/2024) es de 2667 personas (calculada conforme a lo establecido en la disposición adicional primera del Real Decreto 364/2005, de 8 de abril: el período de referencia para dicho cálculo serán los 12 meses inmediatamente anteriores, durante los cuales se obtendrá el promedio de trabajadores empleados, incluidos los contratados a tiempo parcial, en la totalidad de centros de trabajo de la empresa), por lo que la obligación de contratación de personal con discapacidad asciende a 53,34 personas. Dado que la empresa (según comprobación del SEPE en aplicación del Criterio Técnico 98/2016, sobre actuaciones de la Inspección de Trabajo y SS en materia de cuota de reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad) tiene una plantilla media de 19 personas con discapacidad en los 12 meses anteriores, solicita la declaración de excepcionalidad y la aplicación de medidas alternativas por las 34 personas con discapacidad dejadas de contratar”

Con fechas 10 y 18 de septiembre y 12 de diciembre de 2024, se vuelve a requerir por mail a la empresa para que acredite los periodos no acreditados hasta el momento de obligación de reserva del 2% en favor de trabajadores con discapacidad.

Con fecha 17 de diciembre de 2024, se requiere nuevamente al contratista a través de NOTE, la documentación que complemente la presentada hasta ese momento para acreditar la obligación de reserva del 2 por 100 en favor de trabajadores con discapacidad.

En fecha 23 de enero de 2025 el contratista aporta declaración responsable del representante de la entidad, en la que indica que: " la Entidad cuenta con resolución del INSS, de declaración de excepcionalidad y de adopción de medidas alternativas para el cumplimiento alternativo de la cuota de reserva en favor de los trabajadores con discapacidad de su empresa, y que la entidad viene dando respuesta a dicha obligación, mediante la realización de contratos mercantiles con diversas entidades denominadas Centros Especiales de Empleo, detallando los gastos incurridos hasta el mes de noviembre de 2024:

Meses	Facturación mes
may-24	27.098,45
jun-24	30.085,24
jul-24	40.813,02
ago-24	27.074,03
sep-24	28.625,22
oct-24	47.630,40
nov-24	36.214,29

A la vista de la documentación aportada, queda acreditado lo siguiente:

1. Durante el periodo de 01/04/2024 a 23/05/2024 el contratista debería acreditar, según resolución del INSS, la contratación de 53 personas con discapacidad y acredita la contratación de 19 trabajadores con discapacidad, por lo que, no se estaría acreditando la contratación de 34 trabajadores con diversidad funcional.

2. Durante el periodo 24/05/2024 a 30/06/2024 el contratista debería acreditar, según resolución del INSS, la contratación de 53 personas con discapacidad; Para calcular el número de personas con discapacidad contratadas durante este periodo mediante la realización de contratos mercantiles con diversas entidades denominadas Centros Especiales de Empleo, se ha de atender al REAL DECRETO 364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de reserva en favor de los trabajadores con discapacidad, que en su artículo 2.2 establece:

"El importe anual de los contratos mercantiles o civiles con centros especiales de empleo o con trabajadores autónomos con discapacidad y de los contratos entre los centros especiales de empleo y las empresas colaboradoras para la constitución de enclaves laborales de las medidas previstas en los párrafos a), b) y d) del apartado anterior habrá de ser, al menos, tres veces el indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) anual por cada trabajador con discapacidad dejado de contratar por debajo de la cuota del dos por ciento".

El IPREM relativo al año 2024 es el que figura en la siguiente tabla:

Año	IPREM Mensual	IPREM Anual (12 pagas)	IPREM Anual (14 pagas)
2024	600,00 €	7.200,00 €	8.400,00 €

Vista la declaración responsable del contratista en la que se acredita la realización de contratos mercantiles con Centros Especiales de Empleo por un valor que asciende en mayo a 27.098,45€ y en junio 30.085,24€, se procede a realizar el cálculo tal como establece el artículo 2.2 del REAL DECRETO 364/2005, tomando como referencia el IPREM mensual, de 600€, por referirse dicho calculo al periodo 24/05/2024 a 30/06/2024:

PERIODO		ACREDITAN GASTO	IPREM 600*3	Nº DE TRABAJADORES DISCAPACIDAD CONTRATADOS	Nº DE TRABAJADORES DISCAPACIDAD QUE DEBEN CONTRATAR	Nº DE TRABAJADORES DISCAPACIDAD NO ACREDITADOS
24/05/2024	31/05/2024	27.098,45	1.800	15	53	38
01/06/2024	30/06/2024	30.085,24	1.800	17	53	36

Atendiendo a lo expuesto y a modo de resumen en el siguiente cuadro se recoge la contratación de personas con diversidad funcional durante el período de ejecución del contrato:

PERIODO		ACREDITAN GASTO	IPREM 600*3	Nº DE TRABAJADORES DISCAPACIDAD CONTRATADOS	Nº DE TRABAJADORES DISCAPACIDAD QUE DEBEN CONTRATAR	Nº DE TRABAJADORES DISCAPACIDAD NO ACREDITADOS
01/04/2024	23/05/2025	NO PROCEDE	NO PROCEDE	19	53	34
24/05/2024	31/05/2024	27.098,45	1.800	15	53	38
01/06/2024	30/06/2024	30.085,24	1.800	17	53	36

A la vista de la documentación aportada, la entidad habría incurrido en un cumplimiento parcial de la obligación establecida en el Artículo 4 del Decreto 213/1998, de 17 de diciembre, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen medidas en la contratación administrativa de la Comunidad de Madrid para apoyar la estabilidad y calidad del empleo, de tener contratado al menos un 2 por 100 de trabajadores con discapacidad en caso de que la plantilla total de la entidad, durante el periodo de ejecución del contrato, supere los 50 trabajadores, de acuerdo con el artículo 42 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre.

Acreditado el incumplimiento de la obligación y de conformidad con el Artículo 3 del Decreto 213/1998, de 17 de diciembre, deben determinarse las responsabilidades a través del correspondiente procedimiento incoado por el Órgano de Contratación, pudiéndose imponer una penalidad económica consistente en detraer de las certificaciones o facturas pendientes de pago la cantidad que resulte de aplicar al importe de la garantía definitiva un porcentaje que, como máximo, será del 10 por 100 de la misma. Asimismo, el importe de la penalidad se graduaría en función del porcentaje de incumplimiento, respondiendo de ella la garantía definitiva constituida en caso de que el precio del contrato hubiese sido satisfecho en su totalidad o las certificaciones o facturas pendientes de pago no resultasen bastantes para atender al importe de la penalidad.

Para el cálculo del porcentaje de incumplimiento se ha multiplicado el número de días de vigencia del contrato (91) por el número de trabajadores con discapacidad cuya contratación debería haberse acreditado para dar cumplimiento a la obligación (53, según resolución del INSS) durante el período de ejecución del contrato 01/04/2024 a 30/06/2024.

AÑO	DESDE	HASTA	DÍAS	PLANTILLA MEDIA	2%	DÍAS A ACREDITAR
2024	01/04/2024	30/06/2024	91	2.667	53	4.823
					TOTALES	4.823

Paralelamente se ha contabilizado el número de días acreditados a lo largo del período de ejecución del contrato por los trabajadores con discapacidad contratados. De la comparativa entre ambos

La autenticidad de este documento se puede comprobar en <https://gestion.a.comunidad.madrid/csv> mediante el siguiente código seguro de verificación:

AÑO	DESDE	HASTA	DÍAS CONTRATO	PLANTILLA MEDIA	2%	DÍAS A ACREDITAR	DÍAS QUE ACREDITA DISCAPACIDAD TRAB. DÍAS		DÍAS QUE NO SE ACREDITAN	% penalidad
2024	01/04/2024	23/05/2024	53	2.667	53	2.809	19	1.007	1.802	
2024	24/05/2024	31/05/2024	8	2.667	53	424	15	120	304	
2024	01/06/2024	30/06/2024	30	2.667	53	1.590	17	510	1.080	
	TOTALES		91	2.667	53	4.823	51	1.637	3.186	66.06

Para responder de sus obligaciones, el contratista constituyó garantía definitiva por importe de 6.960,95 euros, sobre la que se puede imponer penalidad por importe máximo de 696,10 euros (10 por 100 del importe total constituido). Dado que el porcentaje de incumplimiento de la obligación se ha determinado en un 66,06 por 100, corresponde la imposición al contratista de una penalidad por importe de 459,83 euros (el 66,06 % del 10% del importe de la garantía definitiva constituida).

CUARTO.- Por Orden 49/2026, de 13 de enero de 2026, se inicia el procedimiento de determinación de responsabilidades a la entidad **FUNDACIÓN SAMU., (N.I.F.: G41914243)**, por incumplimiento de la obligación contractual establecida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del citado contrato de servicios, referente a lo establecido en el art. 42 del texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, siendo el importe de la penalidad que correspondería a dicho incumplimiento (según el art. 3.1 del citado Decreto 213/1998) de **CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMO DE EURO (459,83 euros)**, por incumplimiento parcial de la obligación de respetar la cuota de reserva del 2 por 100 en favor de trabajadores con discapacidad desde el 1 de abril de 2024 hasta el 30 de junio de 2024.

En esta Orden se le concede a la entidad citada trámite de audiencia para que en un plazo de diez días hábiles pueda presentar las alegaciones, documentos y justificaciones que estimen pertinentes.

Finalizado el plazo concedido de trámite de audiencia, la entidad FUNDACIÓN SAMU no ha presentado ninguna documentación o escrito en relación con la imposición de la penalidad antes descrita.

Por todo ello, procede confirmar en todos sus extremos la penalidad propuesta en la Orden 4559/2025, de 13 de enero de 2026, de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, por la que se inició el procedimiento de determinación de responsabilidades.

Al amparo de la anterior fundamentación y del Decreto 213/1998, de 17 de diciembre, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen medidas en la contratación administrativa de la Comunidad de Madrid, para apoyar la estabilidad y calidad del empleo y en uso de las atribuciones que me han sido conferidas por las disposiciones vigentes, previos el informe pertinente del Servicio Jurídico,

DISPONGO

Imponer a la entidad **FUNDACIÓN SAMU., (N.I.F.: G41914243)**, una penalidad de **CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMO DE EURO (459,83 euros)**, por incumplimiento de la obligación contractual establecida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del citado contrato de servicios, referente a lo establecido en el art. 42 del texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre.

Para realizar el ingreso de la penalidad, los interesados deberán dirigirse al correo de la Caja de Depósitos de la Comunidad de Madrid en la siguiente dirección: caja.comunidadmadrid@madrid.org, donde se les facilitarán las instrucciones para realizar dicho trámite.

Se deberá indicar el número del expediente de contratación, el número de licitador y el número de Orden, para facilitar la verificación correcta del licitador y el concepto por el que se realiza el depósito. El justificante correspondiente se presentará en el plazo máximo de quince días, contados desde el día

siguiente a la notificación de la presente Orden, a través del Registro Telemático de la Comunidad de Madrid, de conformidad con el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas <https://sede.comunidad.madrid/guia tramitacion-electronica#escritos>), dirigiendo la solicitud al Área de Contratación de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales.

La falta de abono y acreditación en dicho plazo, dará lugar a la incautación de la garantía definitiva hasta cubrir el importe de la correspondiente penalidad.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse con carácter potestativo recurso de reposición en el plazo un mes, ante el mismo órgano que lo ha dictado, o bien, directamente, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia o los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, ambos plazos contados desde el día siguiente al de la recepción de la notificación, sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime procedente interponer. Todo ello conforme a lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y artículos 8 a 12 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Fecha	LA CONSEJERA DE FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES (P.D. Orden 3147/2023, de 5 de diciembre, BOCM nº 304, de 22/12/2023) LA DIRECTORA GENERAL DE INFANCIA, FAMILIA Y FOMENTO DE LA NATALIDAD
A la fecha de la firma	Firmado digitalmente por: VALMAÑA OCHAITA SILVIA Fecha: 2026.03.19 17:09